

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, cinco (05) de julio de dos mil veintidós (2022)

DEMANDANTE : JOHN JAIRO ÁLVAREZ RÍOS
DEMANDADO : ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PROTECCIÓN S.A.
LITISCONSORCIO NECESARIO: JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ
TIPO DE PROCESO : ORDINARIO
RADICADO NACIONAL : 05-001-31-05-014-2018-00493-01
RADICADO INTERNO : 125-22
DECISIÓN : MODIFICA PARCIALMENTE, CONDENA Y CONFIRMA
ACTA NÚMERO : 172

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a emitir sentencia de segunda instancia en la que se estudia el recurso de apelación, en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022, la providencia en segunda instancia se profiere escrita.

ANTECEDENTES

La parte demandante solicita se DECLARE que tiene una pérdida de la capacidad laboral superior al 50% y la fecha de estructuración es del 29 de junio de 2016.

Como consecuencia de lo anterior, se reconozca la pensión de invalidez al demandante en forma retroactiva; la indexación, y costas procesales.

Fundamentó sus pretensiones en que, presenta graves padecimientos de salud, inicialmente a raíz de un accidente de tránsito ocurrido en 1994 y posteriormente como consecuencia de un accidente de trabajo ocurrido el 13 de mayo de 2014, desencadenando lesión crónica de rodilla derecha, limitación funcional de rodilla derecha con dificultad para la extensión y flexión producto de esguinces y torceduras que comprometen el ligamento cruzado anterior y posterior, acortamiento MID por cirugía ipsilateral, artrosis moderada de rodilla, osteoartrosis de cadera bilateral. Como consecuencia de las anteriores patologías y con el fin de mejorar la calidad de vida, el demandante ha sido intervenido quirúrgicamente por cirugía ipsilateral, cirugía de reconstrucción de ligamentos de rodilla derecha y cirugía de cadera. El demandante no puede permanecer largos periodos de pie, sentado o acostado porque presenta dolores intensos, por lo tanto, permanece medicado para disminuir molestias, adicionalmente, requiere apoyo de bastón para trasladarse por presentar problemas de estabilidad y por tener una de sus piernas mas corta, tiene problema para flexionar rodillas y cadera debido a que movilidad se ha reducido con el paso del tiempo. Por los padecimientos y cirugías a las que se ha sometido, se han generado incapacidades laborales por 1.269 días, oportunidad en que ha tenido restricciones y recomendaciones médicas para trabajar.

La calidad de vida del demandante es precaria, al continuar con la minusvalía, debido a que su enfermedad es de carácter permanente y degenerativa, debe permanecer medicado, asistir a terapias, citas con ortopedista, a la clínica del dolor y recibir asistencia psicológica, lo que lo imposibilita a ejercer sus funciones laborales y personales.

Para determinar si el demandante podía acceder a pensión de invalidez, la NUEVA EPS remitió al demandante a valoración de pérdida de la capacidad laboral el 4 de septiembre de 2015; solicitó pensión de invalidez el 16 de junio de 2015 a la sociedad PROTECCIÓN S.A, entidad que remitió al actor la Suramericana Seguros de Vida S.A. para ser valorado, dictamen que arrojó una pérdida de la capacidad laboral del 40.5% de origen común, estructurada el 29 de junio de 2016.

Contra el anterior dictamen, el accionante interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, por considerar que carecía de valoración de aspectos físicos, psicológicos y laborales que afectaban el discurrir de su vida, al carecer: 1º. Del análisis del puesto de trabajo, de la labor desempeñada, y las condiciones para que se generara su reintegro a la actividad desarrollada, sobre la cual tenía destreza y conocimiento, 2º. No se tuvo en cuenta ningún tipo de exámenes periódicos pre ocupacionales, generados o pendientes por realizarle al demandante, 3º. El concepto desfavorable de rehabilitación emitido por la EPS, 4º. No se efectuó el estudio y valoración de patologías que, a la fecha de expedición del dictamen, se venían presentando, tal y como ocurre con la osteoartritis de cadera bilateral, los problemas de artrosis y pérdida del movimiento de la rodilla izquierda, 5º. La inexistencia de procedimientos y medicamentos que pudieran mejorar la calidad de vida del actor y 6º. La carencia de valoración del carácter psicológico.

La Junta Regional de Calificación de Invalidez al realizar la valoración, teniendo en cuenta los aspectos de la inconformidad, determinó una pérdida de la capacidad laboral del 52%, el cual fue apelado por la sociedad PROTECCIÓN S.A.; por su parte la Junta Nacional de Calificación de Invalidez estableció un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral del 40.50% por considerar que las patologías sufridas se encontraban calificadas y su padecimiento actual no le impedía reincorporarse a su vida laboral, bajo iguales condiciones en las que se estaba desempeñando.

Asegura que el demandante ha cotizado al Sistema de Seguridad Social para ser amparado en el riesgo laboral y de sus posibles enfermedades. Expresa que como producto de la enfermedad y según recomendaciones médicas, el Sr. John Jairo Álvarez Ríos no puede realizar movimientos repetitivos, constantes ni sobre esfuerzos, no puede flexionar la cadera, rodillas ni permanecer largos periodos de pie ni sentado, restricciones que no se tuvieron en cuenta en la calificación y más, al efectuar el análisis del puesto de trabajo y de la única labor en la que tiene preparación el demandante. Las condiciones de salud del demandante son deplorables porque las complicaciones de su enfermedad le producen problemas nerviosos, intensos dolores, daño en su vida de relación, además de que se trata de una persona de escasos recursos económicos y su familia depende de lo que él pueda

aportar. El demandante no se encuentra en capacidad de reincorporarse a sus funciones laborales, conforme lo han manifestado los diferentes médicos tratantes, sin embargo, la NUEVA EPS se niega a seguir pagando incapacidades con ocasión a los padecimientos calificados porque la pérdida de la capacidad laboral no le permite acceder al reconocimiento de la pensión de invalidez y lo procedente es el reintegro a sus funciones; la empresa donde labora el Sr. John Jairo Álvarez Ríos, por temor a su estado de salud, decidió adelantar periodos de vacaciones con el fin de preservar su calidad de vida.

RESPUESTA A LA DEMANDA

La accionada PROTECCIÓN S.A. en su contestación acepta como cierto las entidades a las cuales se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral; las intervenciones quirúrgicas a las cuales se ha sometido; las incapacidades generadas; que debe asistir permanentemente a citas médicas, según se desprenden de la historia clínica; el 4 de junio de 2015 la NUEVA EPS lo remitió a valoración de pérdida de la capacidad laboral según se desprende del concepto médico de rehabilitación; acepta la solicitud de reconocimiento de pensión de invalidez, pero aclaró que la fecha es 16 de julio de 2015; el dictamen emitido por Suramericana Seguros de Vida S.A con pérdida de la capacidad laboral del 40.5% estructurada el 29 de junio de 2016 con origen común; acepta lo relativo a la calificación realizada por de Suramericana, los argumentos del recurso interpuesto y el porcentaje de calificación de la Junta Regional de Calificación sin que sea cierto que este sea más completo o tenga en cuenta los argumentos del recurso porque la sustentación del dictamen se concentra en el ítem de las deficiencias las cuales es incrementado y sobre calificado; acepta la calificación de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y los argumentos expuestos en dicho dictamen en el que consideró una sobre calificación la deficiencia; acepta que el demandante ha cotizado al Sistema de Seguridad social; y el derecho de petición presentado a la NUEVA EPS. No le consta que por las patologías sufridas, el demandante no pueda permanecer muto tiempo sentado, acostado o de pie y que ello genera que permanezca medicado, porque en la prueba aportada no se reposa concepto médico de las restricciones y son afirmaciones subjetivas; no le consta la calidad de vida del demandante, la naturaleza de la enfermedad padecida y las limitaciones; que como

restricciones, no pueda efectuar movimientos repetitivos, constantes y sobre esfuerzos, flexionar cadera ni rodillas; no le consta los problemas nerviosos, los intensos dolores, el daño en la vida en relación del demandante y que la falta de tratamiento adecuado ha generado quebrantos en su salud, por tratarse de afirmaciones subjetivas; que el demandante no se encuentra en capacidad de reincorporarse a su vida laboral, porque no reposan los conceptos médicos aludidos; no le consta la negación de la EPS a pagarle incapacidades, pero advierte que además de ser un derecho del demandante, este no es el proceso para ventilarlo; y no le consta que el empleador del demandante haya adelantado periodos de vacaciones. En relación a los demás hechos, dijo que no los acepta.

Finalmente, se opuso a las pretensiones de la demanda (fls. 106 a 113 del expediente digital 04).

Por medio de auto del 17 de octubre de 2018, el Juzgado de conocimiento ordenó integrar a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez en calidad de litisconsorcio necesario por pasiva, en virtud de la excepción previa propuesta pro la accionada PROTECCIÓN S.A. de NO COMPRENDER LA DEMANDA TODOS LOS LITISCONSORTES NECESARIOS (fls. 128 a 130 del expediente digital 04); en auto del 2 de mayo de 2019, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez fue emplazada e informada que en caso de no comparecer el trámite se continuaría con el curador designado (fl. 151 y 152); y en auto del 29 de septiembre de 2021 se dio por no contestada la demanda presentada por el Curador por extemporánea, y dio por no contestada la segunda contestación, que fue presentada por la entidad (expediente digital 07).

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

En sentencia del 9 de abril de 2022, el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín, DECLARÓ la nulidad de los dictámenes de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, y por Protección S.A. - Compañía Suramericana de Seguros de Vida S.A., y en su lugar, declaró que el dictamen más acorde y válido con el estado de salud del demandante es el emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez que le otorgó una pérdida de capacidad laboral del 52%, estructurada el 21 (sic) de Junio de 2016.

CONDENÓ a la PROTECCIÓN S.A., a reconocer y pagar en favor del demandante la pensión de invalidez de origen común, del Régimen de Ahorro Individual, equivalente al salario mínimo legal, estructurada a partir del 29 de junio de 2016, cuyo retroactivo causado hasta la fecha de la sentencia, teniendo en cuenta 13 mesadas anuales e incrementos anuales, asciende a la suma de \$61.814.538, suma que deberá ser indexada teniendo en cuenta las variación del IPC certificado por el DANE, desde la fecha en que se causó cada mesada pensional, hasta la fecha en que se haga efectivo el pago de la obligación.

AUTORIZÓ a PROTECCIÓN S.A., a descontar o compensar del retroactivo pensional todos los subsidios por incapacidad efectivamente pagados al demandante, desde la fecha de causación de la pensión hasta la fecha en que se haga efectivo el pago de la obligación. Le ORDENÓ a PROTECCIÓN S.A. que del retroactivo pensional deduzca el valor correspondiente al porcentaje de la Seguridad Social en Salud y ponerlo a disposición de la EPS a la cual esté afiliado el demandante. Condenó en costas a PROTECCIÓN S.A., sin costas a cargo de la Junta Nacional de Calificación.

IMPUGNACIÓN

El apoderado de la sociedad PROTECCIÓN S.A. apela la decisión, manifestando que en el plenario existen cuatro dictámenes de pérdida de la capacidad laboral, de los cuales, tres de ellos concuerdan en ser desfavorables al trabajador, pero el A Quo tuvo en cuenta la calificación de la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Si bien, en los dictámenes presentados con la demanda se calificó de manera presencial al actor y la única que no lo hizo fue el dictamen de la Facultad de Salud Pública de la U de A, no obstante, la perito de la Facultad de Salud Pública indicó que el demandante se queja de los dolores, pero no concuerda con lo que está escrito en la historia clínica.

Señala que en primera instancia se tuvo en cuenta el dictamen de la Junta Regional de Calificación porque el médico calificador constata con otra persona que hace parte de la emisión del dictamen, pero no tiene en cuenta si

al trabajador lo van a reubicar o se va a dar un cambio de rol laboral, siendo el ortopedista como médico tratante el que da las recomendaciones o restricciones y no el médico calificador, ya que este último se debe de basar en el estudio de la historia clínica. Por lo anterior, considera que se equivoca el A Quo al tener en cuenta lo manifestado por el médico tratante (sic).

Igualmente dice que se tuvo un aumento en la calificación del rol laboral, del 10% al 15%, al asegurar que al demandante le tenían que hacer un cambio del rol laboral y no adaptarlo como lo ordenó el médico tratante, sin embargo, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez señala que en la calificación de la Junta Regional se excedieron o se desfasaron en ciertas calificaciones y por eso se disminuyó el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral; afirmó que el aumento de la deficiencia se dio porque se debía realizar el cambio del puesto de trabajo y no modificarlo, sin que ello lo dijera la historia clínica y se aumentó la deficiencia a pesar que la Junta Nacional de Calificación dijo que se había desfasado.

En consideración a lo anterior, solicita sea revocada la sentencia, se deje en firme el dictamen emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez o el de la Facultad de Salud Pública por ser el más favorable y en donde se explica el porqué, debe ser el 10% del rol laboral ocupacional del puesto de trabajo adaptado con base en lo que se manifestó en la Historia clínica, y al no contar con el 50% de pérdida de la capacidad laboral no cumple con el requisito para el reconocimiento de la pensión de invalidez.

En segundo lugar, en caso de confirmarse la sentencia y se tenga en cuenta el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez y la fecha de estructuración, solicita se tenga en cuenta que la SL 5170 de 2021 cambio su posición en la cual manifestó que se debe de pagar la pensión de invalidez desde la fecha de estructuración (como dice la norma), o desde el pago del último subsidio de incapacidad y en este evento dicho pago se generó el 11 de abril de 2018, por lo tanto, en caso que no se evidencie nuevo pago de subsidio de incapacidad se debe reconocer el retroactivo desde ese momento, pero si existe un nuevo subsidio de incapacidad, solicita se le pague a partir del último pago y no se haga la compensación indicada en primera instancia,

porque no estaría implementando la nueva posición de la Corte Suprema de Justicia.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La apoderada del demandante solicita se confirme la sentencia de primera instancia, aduciendo que tal y como se indicó pro el Juez, la valoración del paciente debe ser integral y real, y al remitirse a los dictámenes que obran en el expediente, se aprecia que las diferencias sustanciales entre los dictámenes del Fondo de Pensiones, la Junta Nacional de Calificación y la Facultad de Salud Pública de la U de A, frente al dictamen de la Junta Regional de Calificación de Antioquia, consisten en que los primeros adolecen de información importante y relevante frente a la gravedad de la patología, su permanencia y/o temporalidad, su nivel degenerativo, cómo ello ha afectado el nivel comportamental del actor, su salud emocional y/o estado psicológico y la imposibilidad para desarrollar la labor y el oficio, y más porque el perito de la Junta Regional de Calificación, en su declaración explicó que en los demás dictámenes no fueron considerados ni evaluados 1º) el concepto del ortopedista tratante, y señaló que el compromiso de las articulaciones comprometidas del paciente es severo y avanzado y presenta signos progresivos de osteoartrosis en ambas caderas y artrosis en la rodilla derecha, 2º) presenta lumbalgia crónica generada en gran parte por la patología articular, 3º) las patologías calificadas son altamente degenerativas y con avanzada sintomatología, 4º) reprocha que en los demás dictámenes se haya calificado al paciente, con una ocupación adaptada donde éste puede seguir laborando, cuando la actividad del demandante, consistente en trabajos de aseo que no le posibilita desarrollar sus funciones a menos de que exista desplazamientos y explica que la variación del dictamen se genera porque el demandante necesita un cambio de oficio.

Adicionalmente, sostiene que se debe tener en cuenta que los médicos tratantes han sido enfáticos respecto las nulas probabilidades de rehabilitación y el estado de salud del actor cada vez es más precario; se encuentra en espera de la programación de intervención quirúrgica con la cual se busca aminorar los dolores que padece; la calidad de vida del demandante es precaria, porque su estado de salud no solo le impide llevar una vida normal

ni desarrollar sus actividades laborales, en donde se presenta solo a hacer presencia porque por sus patologías no puede ejecutar ningún tipo de trabajo y existe mal ambiente laboral, dado que su empleador lo hace sentir como una carga; en el último dictamen, no hubo una intermediación directa con mi representado, efectuándose una calificación impersonal; y resalta que el sistema integral de seguridad social, asegura el riesgo de invalidez a razón del oficio realizado por el afiliado, con tal fin, se asignó a los subsistemas de pensiones y riesgos laborales, la cobertura prestacional siendo por ello que es deber del subsistema reconozca la cobertura ante la imposibilidad de llevar a cabo el trabajo y/o actividad para la cual se vinculó; y finalmente sostiene que el retroactivo pensional obedece la fecha de estructuración de la patología y a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 100 de 1993

El apoderado de PROTECCIÓN S.A. se ratificó en todos y cada uno de los términos en que se presentó y sustentó el recurso de apelación.

PRONUNCIAMIENTO JURÍDICO

El problema jurídico se centra en determinar en virtud del recurso de apelación:

i) Si hay lugar a revocar la sentencia, por equivocarse el A Quo al tener en cuenta lo manifestado por el médico calificador de la Junta Regional de Calificación de Invalidez y adoptar el dictamen emitido por dicha entidad; ii) Si hay lugar a dejar en firme el dictamen emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez o el de la Facultad de Salud Pública, por ser el más favorable, con los cuales no logra superar el 50% de la pérdida de la capacidad laboral; iii) En el evento de confirmarse la sentencia, determinar si hay lugar a reconocer el retroactivo pensional desde el último subsidio de incapacidad reconocido al demandante (11 de abril de 2018) y en caso que se evidencie un nuevo pago de dicho subsidio, el retroactivo sea reconocido desde ese momento.

Se encuentra acreditado en el plenario y no es objeto de discusión que el 9 de agosto de 2016, demandante fue calificado por Suramericana Seguros de Vida S.A., con una pérdida de la capacidad laboral del 40.5%, de origen común, estructurada el 29 de junio de 2016 (fls. 29 a 36 del expediente digital 01); contra dicha decisión se interpusieron los recursos de reposición y en subsidio

de apelación por la apoderada del demandante (fl. 39 a 41); por su parte, la Junta Regional de Calificación de Invalidez estableció una pérdida de la capacidad laboral del 52%, confirmando el origen y la fecha de estructuración (fls. 45 a 51), decisión apelada por la sociedad PROTECCIÓN S.A; en el dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez se estableció que el demandante cuenta con una pérdida de la capacidad laboral del 40.5%, confirmando origen y fecha de estructuración (fl. 57 a 63); y en el dictamen de la Facultad de Salud Pública de la U de A (decretado de oficio por el Juzgado de conocimiento) se reportó una pérdida de la capacidad laboral del 44.10% estructurada el 13 de diciembre de 2019, de origen común (expediente digital 21).

También se encuentra demostrado con el certificado de incapacidades emitido por la NUEVA EPS, que la última incapacidad del Sr. JOHN JAIRO ÁLVAREZ RÍOS data del 8 de junio de 2018 (fls. 13 a 21); el fondo de pensiones PROTECCIÓN S.A en respuesta a oficio, certificó que al 11 de noviembre de 2021, la entidad había pagado por subsidio de incapacidad temporal desde el 1º de septiembre de 2015 hasta el 6 de abril de 2016 (expediente digital 17); la accionada PROTECCIÓN S.A, en respuesta a oficio, aportó historia laboral con fecha de generación del 22 de marzo de 2022, de la que se extrae que la sociedad Aseo y Sosténimiento y Compañía S.A. realizó cotizaciones hasta el mes de febrero de 2022 (expediente digital 23)

Visto lo anterior, se resolverá el recurso de apelación de la siguiente manera:

1. Del porcentaje de pérdida de la capacidad laboral del demandante

En primera instancia, el A Quo en síntesis, adopta el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, al considerar que que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y la Facultad de Salud Pública de la U de A no le dieron entidad a la patología de osteoartritis de ambas caderas mientras que el médico ponente de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, la ubica en la tabla 14.15 y la califica en el 49% de deficiencia, por estar comprometidas ambas cadera y tenían osteoartritis en cada cadera, lo que implicaba una cirugía de cadera o recepción de cadera, además de la lumbalgia crónica y los problemas articulares; determina que las ponderaciones dadas por la Junta Regional de Calificación de Invalidez tiene suficiente criterio científico y es más

pormenorizado el dictamen de la Junta Regional de Invalidez; el porcentaje de deficiencia guarda consonancia con las patologías sufridas por el demandante, al considerar que una persona que esté ad portas de recepción de caderas por osteoartrosis, no puede hallarse en una diagnóstico por averiguar, tal y como es indicado por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y la Facultad de Salud Pública de la U de A.

En relación al rol ocupacional o laboral, consideró que la ponderación emitida por la Junta Regional de Calificación de Invalidez es más racional en comparación con la dada en los otros dictámenes, pues resaltar, que una persona con una pérdida de la capacidad laboral como la del demandante, no puede hacer el mismo rol readaptado dado que en la labor de oficios varios no va a ser apto al realizar las labores sentado, y no se demostró una capacitación para ejercer una labor intelectual. Resaltó que tanto el médico calificador como la fisioterapeuta a quien el perito le consultó, consideran que no hay lugar a la readaptación por tratarse de una persona que tiene compromiso de ambas caderas, pendiente de cirugía o recepción de estos miembros.

Y con fundamento en lo anterior, determinó que el demandante reúne el requisito de la pérdida de la capacidad laboral superior al 50% estructurada el 29 de junio de 2016.

La anterior decisión es apelada por el apoderado de PROTECCIÓN S.A. por existir tres dictámenes que son desfavorables; la perito de la Facultad de Salud Pública de la U de A indicó que el demandante se queja de los dolores que no concuerda con lo plasmado en la historia clínica; erró el A Quo al tener en cuenta lo indicado por el perito de la Junta Regional de Calificación de Invalidez al ser el médico tratante el que debe determinar la reubicación o el cambio de rol; la Junta Nacional de Calificación de Invalidez manifestó el exceso en la calificación de la Junta Regional de Calificación.

Partiendo de lo anterior, y después de ser valorada en su conjunto las pruebas de acuerdo a las reglas de la **sana crítica y la libre formación del convencimiento** (art. 61 del CPL), al hacer la comparación de los dictámenes que reposa en el plenario, la Sala CONFIRMARÁ la decisión del A Quo por medio de la cual declaró que el dictamen de la la Junta Regional de Calificación

es acorde y valida el estado de salud del demandante, por las siguientes razones:

1º. Todos los dictámenes coincidieron en calificar la deficiencia de Artrosis bilateral de cadera o Limitación funcional de ambas cadera y rodillas con la tabla 14.15, sin embargo, la diferencia radica en el porcentaje asignado, luego que:

- Suramericana Seguros de Vida S.A, le asignó **36%** (CAPITULO 14 TABLA 14,15)
- La Junta Regional de Calificación de Invalidez, la calificó asignándole un porcentaje de **49%** (CAPITULO 14 TABLA 14,15)
- La Junta Nacional de Calificación de Invalidez consideró que existía una sobrevaloración por lo que modificó el dictamen anterior y acogió la calificación dada en primera oportunidad, ello es, la Artrosis bilateral de cadera con la asignación del **36%** (CAPITULO 14 TABLA 14,15)

No obstante, como el dictamen de la Facultad de Salud Pública de la U de A calificó la Limitación funcional de ambas cadera y rodillas en **49%** (TABLA 14,15), es decir, le asignó el mismo porcentaje dado por la Junta Regional de Calificación, es contradictorio que la parte accionada PROTECCIÓN S.A. pretenda que se dé aplicación de los dictámenes de la Junta Nacional de Calificación o de la Facultad de Salud Pública de la U de A sabiendas que no guardan relación en la calificación de las deficiencias, y por ende, al no estar de acuerdo con el porcentaje de la deficiencias de la Junta Regional de Calificación implica que también se aparte de la calificación de las deficiencias de la Facultad de Salud Pública de la U de A.

2º. Fueron concordantes los dictámenes aportados con la demanda (Suramericana Seguros de Vida S.A, la Junta Regional de Calificación y la Junta Nacional de Calificación), en calificar la deficiencia denominada Meniscopatía en rodilla derecha rodilla anquilosada a la que se le asignó 20% (CAPITULO 14 TABLA 14,12), deficiencia que brilla por su ausencia en el dictamen de la Facultad de Salud Pública de la U de A.

Lo anterior, da lugar que plantear como hipótesis, que de haber sido tenida en cuenta la Meniscopatía en rodilla derecha rodilla anquilosada en el 20%, por

parte de la Facultad de Salud Pública de la U de A, generaría como deficiencia el valor máximo del 50%, conclusión a la que se llega luego de realizar como ejercicio académico la inclusión de dicha deficiencia a las calculadas en el dictamen de la Facultad de Salud Pública de la U de A, y de ello se refleja lo siguiente:

SUMA DE NUEVA DEFICIENCIA EN DICTAMEN FACULTAD SALUD PÚBLICA		
LIMITACION FUNCIONAL DE AMBAS CADERAS Y DORILLAS		49%
MENISGOPATÍA		20%
DOLOR CRONICO		10%
FORMULA	A+	(100-A)*B
		100
DEFICIENCIA 1 Y 2	49+	(100-49)*20
		100
	49+	(51)*20
		100
	49+	1020
		100
	49+	10,2
	49+10,2	
	59,2	
DEFICIENCIA 3	A+	(100-A)*B
		100
	59,2+	(100-59,2)*10
		100
	59,2+	(40,8)*10
		100
	59,2+	408
		100
	59,2+	4,08
	59,2+4,08	
	63,28	
SUMA DEFICIENCIAS	59,2	
	63,28	
DEFICIENCIA COMBINADA	122,48	
DEFICIENCIA COMBINADA * 0,5	61,24	

En ese sentido, como el valor total de deficiencia no puede superar el 50% se toma el tope máximo, en ese evento al realizar la sumatoria del 50% de las deficiencias, con el 13% de la valoración del rol laboral y el 4.1% de otras áreas calculadas por la Facultad de Salud Pública de la U de A, este ejercicio llevaría a sostener que el demandante alcanzaría una pérdida de la capacidad laboral del **67.1%**. Así las cosas, al no existir claridad de las razones por las cuales en el dictamen de la Facultad de Salud Pública de la U de A no se incluyó la

Meniscopatía en rodilla derecha rodilla anquilosada a pesar de ser una deficiencia común, calificada en los anteriores dictámenes, es otra de las razones por las cuales no se le dará validez.

3º. Consideró la Facultad de Salud Pública de la U de A que el demandante cuenta con una deficiencia adicional a las plasmadas en los dictámenes restantes, y que corresponde al Dolor Crónico al cual le asignó el 10%, porcentaje que en caso de ser adicionado a las deficiencias analizadas por Suramericana Seguros de Vida S.A y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, conlleva que el demandante supere el 50% de la pérdida de la capacidad laboral, teniendo en cuenta el siguiente ejercicio académico realizado por la Sala:

SUMA DE NUEVA DEFICIENCIA EN DICTAMEN JUNTA NACIONAL		
LIMITACION FUNCIONAL DE AMBAS CADERAS Y DORILLAS		36%
MENISGOPATÍA		20%
DOLOR CRONICO		10%
FORMULA	A+	(100-A)*B
		100
DEFICIENCIA 1 Y 2	36+	(100-36)*20
		100
	36+	(64)*20
		100
	36+	1280
		100
	36+	12,8
	36+10,2	
	46,2	
DEFICIENCIA 3	A+	(100-A)*B
		100
	46,2+	(100-46,2)*10
		100
	46,2+	(53,8)*10
		100
	46,2+	538
		100
	46,2+	5,38
	46,2+5,38	
	51,58	
SUMA DEFICIENCIAS	46,2	
	51,58	
DEFICIENCIA COMBINADA	97,78	
DEFICIENCIA COMBINADA * 0,5	48,89	

Así las cosa, si al valor total de las deficiencias, que es 48.89% se le suma el 16.1% calificado por Suramericana Seguros de Vida S.A y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, por rol laboral, ocupacional y otras áreas, se llegaría a la conclusión que el demandante alcanzara una pérdida de la capacidad laboral del **67.1%**. Y el mismo ejercicio se puede realizar con el dictamen de la Junta Regional de Calificación, que sin lugar a dudas superaría el 52% de la pérdida de la capacidad laboral que inicialmente fue reconocido.

4º. En la declaración dada por la perito calificadora de la Facultad de Salud Pública de la U de A, al hacer referencia a los aspectos psicológicos del demandante indicó, que desde el punto de vista médico existe un umbral del dolor más alto que el común de las personas y que los especialistas referían que no se compadecía lo que expresaba la persona con la expresión del daño, por lo tanto concluyó, que hay un componente psicológico que tiende a maximizar la situación del estado de la persona. No obstante, dicha afirmación se fundamenta únicamente en la prueba documental – historia clínica- y no en una valoración presencial y directa del paciente, teniendo en cuenta que aceptó no haber realizado la valoración del paciente con ocasión a las restricciones de pandemia.

5º. En relación al porcentaje dado al rol ocupacional: se opuso PROTECCIÓN S.A. a que se tenga en cuenta el 15% asignado por la Junta Regional de Calificación, argumentando que la Junta Nacional de Calificación determinó que se encontraba sobrevalorada y debía ser el 10%, y porque es el médico tratante el que determina si el demandante requiere cambio de puesto de trabajo y no el perito calificador.

Al respecto, nos debemos remitir a la TABLA I de clasificación de las restricciones en el rol laboral, del CAPITULO II, del que se extrae el porcentaje 10% y 15% a que restricciones corresponde:

“Categoría	Porcentaje máximo asignado
3- Rol laboral o puesto de trabajo adaptado. La persona se encuentra en un estado en el cual, como consecuencia de la deficiencia (s) y luego de la Mejoría. Medica Máxima (MMM) o	

<p>terminado el proceso de rehabilitación integral o en todo caso antes de los 540 días calendario de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad, puede realizar su labor habitual, con limitaciones y restricciones moderadas en y para:</p> <p>Tareas y operaciones: Necesita contar con ayudas técnicas, modificaciones en el puesto de trabajo, aditamentos, férulas, tratamientos continuos y permanentes e incluso ayuda de otro para iniciar, desarrollar y finalizar las tareas principales o secundarias de la labor habitual.</p> <p>Componentes del desempeño: Sensorio moto; integración cognitiva y componentes cognitivos, destrezas psicosociales y componentes psicológicos: Con limitaciones moderadas para la ejecución de los mismos según demandas de la actividad laboral.</p> <p>Tiempo de ejecución: Sin limitación en el 50% de acuerdo con la jornada de trabajo que haya tenido la persona antes de la enfermedad o accidente.</p> <p>Forma de integración laboral: Reintegro con modificaciones en el puesto de trabajo o reubicación temporal.</p>	10
<p>4- Cambio de rol laboral o de puesto de trabajo.</p> <p>La persona se encuentra en un estado en el cual como consecuencia de la deficiencia (s) y luego de la Mejoría Medica Máxima, o terminado el proceso de rehabilitación integral o en todo caso antes de los 540 días calendario de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad, puede realizar su labor habitual, con limitaciones y restricciones graves en y para:</p> <p>Tareas y operaciones: Con el uso de ayudas técnicas, modificaciones en el puesto de trabajo, aditamentos, férulas, tratamientos continuos y permanentes e incluso ayuda de otro la persona solo se puede desempeñar en otro puesto de trabajo, con limitaciones para iniciar, desarrollar y finalizar las tareas principales o secundarias de este nuevo puesto.</p> <p>Componentes del desempeño: Sensorio motor, integración cognitiva y componentes cognitivos, destrezas psicosociales y componentes psicológicos: Con limitaciones moderadas para la ejecución de los mismos según demandas de la actividad laboral.</p> <p>Tiempo de ejecución: sin limitación en el 100% de acuerdo a la jornada asignada.</p> <p>Forma de integración laboral: reubicación definitiva.</p>	15

Teniendo claridad de las implicaciones de cada una de las categorías adoptadas al momento de calificar el rol laboral y una vez analizada la historia laboral, no se avizoran recomendaciones ni restricciones laborales, sin embargo se extrae de la historia clínica que reposa en el expediente digital CD2 lo siguiente:

- El 27 de abril de 2009 por lumbago, le dan como recomendaciones tener una dieta adecuada y medidas caseras (fl. 206 expediente digital CD2)
- El 12 de noviembre de 2014 y 8 de julio de 2015 remisión por parte de ortopedia a Salud Ocupacional bajo la justificación de “restricción, trabajar de pie más de 1 hora, escalas, cuclillas, arrodillarse...” (fl. 95 y 98)
- En concepto de rehabilitación y pronóstico visible a fls. 229 a 230 (sin fecha de expedición), se plasmó que el diagnóstico del actor corresponde a inestabilidad rodilla, igualmente se determinó un pronóstico de recuperación funcional regular y a la pregunta: “C. Se espera que terminado el tratamiento el afiliado se reintegre a su trabajo o se reubique en otra labor:” el médico tratante determinó que **“Probablemente no logre reubicar en el futuro”** oportunidad en que solicitó evaluación por salud ocupacional.
- El 25 de mayo de 2015, medicina laboral le informa a PROTECCIÓN S.A el concepto de rehabilitación **desfavorable** del demandante (fl. 232)
- El 4 de mayo de 2016 remisión por parte de ortopedia a Salud Ocupacional bajo la justificación de “restricción, escalas, trabajar de pie más de 1 hora, arrodillarse, cargar más de 10 kg” (fl. 407)
- El 21 de diciembre de 2016, la especialidad de reumatología como recomendaciones dadas se encuentra la “evitar caídas (calzado antideslizante en el baño para evitar resbalones y tropiezos) / evitar ejercicio de impacto como saltar, correr, subir escaleras/ dolor articular permanente que limita sus actividades (consultar) / hinchazón de una articulación que limita sus actividades (consultar)...” (fl. 259)
- En la historia clínica del 13 de febrero de 2018, quedó registro certificación médica donde consta “... con antecedentes de lumbalgia mecánica crónica + hernia discal lumbar #2, cambios artrosicos de rodilla derecha con antecedentes de CR por ruptura ligamento cruzado anterior + coxartrosis izquierda ... con limitación para sedestación (sentado) y bipedestación (estar de pie) de forma continua, prolongada” (fl. 132 expediente digital CD1)
- El 21 de febrero de 2018, la especialidad de Medicina Física y Rehabilitación le recomendó al paciente ajustar la altura del bastón que

usa, al quedarle corto lo obliga a llevar postura anómala en flexión lumbosacras (fl. 393)

Por su parte, la justificación dada por el perito de la la Junta Regional de Calificación para la asignación del 15% al rol laboral, quien rindió testimonio en primera instancia, se dirigió a la necesidad del cambio del rol laboral, al tratarse de una persona que necesita desplazarse para hacer su actividad laboral y dicha posición fue avalada por la fisioterapeuta de la entidad. Argumento que es aprobado en esta instancia, porque si bien es cierto, no existe una recomendación de cambio de rol laboral por parte del médico tratante, las reglas de la experiencia muestran que una persona que cuenta con:

- Un concepto de rehabilitación desfavorable,
- El médico tratante en un momento de su historia clínica determinó que “Probablemente no logre reubicar en el futuro”,
- La especialidad de ortopedia ha remitido al actor para ser evaluado por salud ocupacional y se tengan como restricción escalas, trabajar de pie más de 1 hora, arrodillarse, cargar más de 10 kg

No es posible que desarrolle y finalice sus **tareas principales** o secundarias de la labor habitual (como se indica en el numeral 3 Tabla I), a sabiendas que se trata de una persona que desempeña labores de oficios varios, y en forma específica la labor de “Aseo” según fue certificado por el empleador ASEO Y SOSTENIMIENTO Y COMPAÑÍA S.A., labores que han sido ejecutadas en centros comerciales, universidades, propiedad horizontal y entidades públicas (expediente digital 18).

Además, una vez sea reintegrado con modificaciones en el puesto de trabajo o reubicación temporal, como se indica en el numeral 3 de la Tabla I, bajo el entendido que sus labores pueden ser desarrolladas sentado (como lo indicó la Junta Regional de Calificación) se hace necesario recordar que en certificación médica del año 2018, se habló de “limitación para **sedestación (sentado)** y bipedestación (estar de pie) de **forma continua**” (Resalto de la sala). En este sentido, es dable afirmar que al demandante se le debe aplicar el numeral 4 de la tabla, que hace referencia a la reubicación definitiva y determina el 15%, lo que genera que no hay lugar a darle validez al dictamen de la Junta Nacional de Calificación.

Por lo analizado anteriormente, considera esta Corporación que la calificación emitida por la Junta Regional de Calificación dio cumplimiento a los parámetros determinados por el Decreto 1507 de 2014 para realizar la calificación del demandante, lo que hace que se confirme en este punto, la sentencia de primera instancia.

2. Del retroactivo pensional

En este sentido, el art. 40 de la Ley 100 de 1993 relativo al monto de la pensión, reza en su último párrafo: *“La pensión de invalidez se reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse, en forma retroactiva, desde la fecha en que se produzca tal estado”*.

El art. 10 del Decreto 758 de 1990 en concordancia con el art. 31 de la Ley 100 de 1993 aclara aún más el tema al señalar frente al disfrute de esta prestación económica al señalar *“la pensión de invalidez por riesgo común se reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse forma periódica y mensual desde la fecha en que se estructure tal estado. Cuando del beneficiario estuvieron en goce del subsidio por incapacidad temporal, el pago de la pensión invalidez comenzará a cubrirse al expirar el derecho al mencionado subsidio”* y el art. 3º del Decreto 917 de 1999 por medio del cual se define la fecha de estructuración o declaración de la pérdida de capacidad laboral establece que *“... En todo caso mientras dicha persona reciba subsidio por incapacidad temporal no habrá lugar a recibir las prestaciones derivadas de la invalidez”*.

En primera instancia se reconoció la prestación económica en forma retroactiva a partir **del 29 de junio de 2016**, y se autorizó a PROTECCIÓN S.A., a descontar o compensar del retroactivo pensional los subsidios por incapacidad efectivamente pagados al demandante, desde la fecha de causación de la pensión hasta la fecha en que se haga efectivo el pago de la obligación. Decisión que fue apelada por PROTECCIÓN S.A., para que en su lugar se ordenara el retroactivo desde el último subsidio de incapacidad que se haya pagado al Sr. John Jairo Álvarez Ríos.

Visto lo anterior, al analizar la prueba aportada en su conjunto, para la Sala es claro que el demandante fue calificado por la Junta Regional de Calificación calificó determinando una pérdida de la capacidad laboral del 52% estructurada el **29 de junio de 2016**, no obstante, a fls 24 a 26 del expediente digital 04, se allegó certificado de incapacidades de la NUEVA EPS, en el que se refleja los pagos por periodos desde el 26 de abril de 2009 al 14 de mayo de 2015 en forma interrumpida, seguidamente, de la respuesta a oficio dada por la sociedad PROTECCIÓN S.A., se extrae que para el 11 de noviembre de 2021, dicha administradora de fondo de pensiones había realizado el pago de subsidio por incapacidad al Sr. John Jairo Álvarez Ríos desde el **1º de septiembre de 2015 hasta el 6 de abril de 2016** (expediente digital 17) y en el certificado de incapacidades de la NUEVA EPS con fecha de emisión del **30 de mayo de 2018** (fls 13 a 21 del expediente digital 04), se desprende que se realizó pago de subsidio de incapacidad al actor hasta el **8 de junio de 2018**.

Si bien, en principio, la Corte Suprema de Justicia adoptaba la posición donde disfrute de la prestación económica de invalidez se generaba desde la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral, y en los eventos donde existía pagos de incapacidades posteriores a la fecha de estructuración, había lugar a ser descontados, pues así se indicó en la sentencia SL 1562 de 2019 cuando señaló:

“Así que, pese a la condición de trabajador dependiente del actor y la existencia de aportes al Sistema General de Pensiones con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez, esta Sala ha indicado con anterioridad (ver sentencia SL619-2013), que ello no desvirtúa el reconocimiento retroactivo del derecho pensional desde que se estructuró el estado de invalidez. En esos términos, no se equivocó el ad quem al señalar que la concurrencia de estas específicas circunstancias (continuidad en la prestación del servicio y cotización al Sistema General de Pensiones), no desvirtúan lo establecido en el artículo 40 de la Ley 100 de 1993, es decir, que el reconocimiento de la pensión de invalidez se haga desde la estructuración.

Ahora bien, en lo que atañe a la incompatibilidad entre el pago de mesadas pensionales y subsidios por incapacidad temporal, el artículo 3 del Decreto 917 de 1999, establece que: (...)

De cara a lo establecido en el citado precepto, estima la Sala que el juez de apelaciones tampoco lo desconoció ni le dio un entendimiento erróneo, pues, por el contrario, al descontar del pago del retroactivo pensional los periodos de subsidios por incapacidad temporal, procuró armonizar lo establecido en el decreto enunciado con las restantes

disposiciones de la Ley 100 de la 1993, que ordenan el reconocimiento de la prestación desde el momento de estructuración de la invalidez y salvaguardar el propósito indiscutible de auxilio.

*Al respecto, se insiste en que el citado artículo 40 de la Ley 100 de 1993 **es claro en indicar que la pensión de invalidez por riesgo común debe otorgarse, de manera retroactiva, a partir de la fecha en que se produce el estado de invalidez**, es decir, desde cuando la pérdida de la capacidad laboral alcanza un porcentaje igual o superior al 50% (artículo 39 de la Ley 100 de 1993). De lo que se deriva que el legislador en el citado precepto no estableció ni explícita ni tácitamente, condición alguna, diferente al estado de invalidez, para proceder al reconocimiento del derecho pensional desde la fecha de estructuración. (...)*

*De modo que, como bien lo dedujo el Tribunal, de cara a la incompatibilidad establecida en el artículo 3 del Decreto 917 de 1999, **cuando, como en el presente asunto, el retroactivo pensional cubija periodos que también han sido cubiertos por subsidios por incapacidades temporales, la prohibición de que trata el citado decreto, a lo sumo, conduciría a la imposibilidad de que se disfruten o perciban, a la vez, la mesada pensional y el subsidio por la incapacidad, pero no a la imposibilidad del reconocimiento del derecho pensional.*** (Resalto de la Sala)

Esa posición fue rectificada en sentencia reciente SL 5170 de 2021, por medio de la cual el Alto Tribunal determinó la posibilidad de pagar las mesadas pensionales desde la fecha de estructuración de la invalidez, en los eventos en que no se hayan reconocido subsidios por incapacidad, pues de ser así, el pago de la prestación se realiza a partir de la última incapacidad. Al respecto dijo:

*“Así las cosas, frente al tema del reconocimiento de la pensión de invalidez estima la Sala que el Tribunal no incurrió en ningún yerro en la intelección que asignó a los preceptos normativos enunciados cuando existen subsidios por incapacidad temporal con posterioridad a la fecha de estructuración del estado de invalidez, al entender que las mesadas se comienzan a pagar, de forma retroactiva, desde la data de la estructuración, **pero siempre que con posterioridad a ella no se hubieren reconocido subsidios por incapacidad**, continuos o discontinuos, evento en el cual se pagará, pero a partir del momento en que expire el derecho a la última incapacidad.*

(...)

*Es claro entonces que, mientras el afiliado se encuentre recibiendo el subsidio por incapacidad temporal no puede percibir prestaciones derivadas de la invalidez, como son las mesadas pensionales, **cuyo pago procede una vez la entidad previsional reconozca la pensión, momento a partir del cual ya no procede el pago de las incapacidades**, porque la acción protectora es asumida por otra*

prestación, dado el nuevo hecho que la causa – la invalidez-, siendo la razón por la cual el sistema de salud no contempla prestaciones económicas para los pensionados --Artículos 28 del Decreto 806 de 1998 y 2.1.3.6 del Decreto 780 de 2016--.

(...)

*Teniendo en cuenta todo lo expuesto en líneas precedentes, la Sala considera necesario precisar su doctrina, en el sentido de señalar que **cuando existen subsidios por incapacidad temporal, continuos o discontinuos, con posterioridad a la fecha de estructuración del estado de invalidez, las mesadas pensionales se comenzarán a pagar sólo a partir del momento en que expire el derecho a la última incapacidad**, postura con la cual queda rectificada y delineada su posición con relación a criterios anteriores que le hubieren sido contrarios (SL1562-2019). ”*

En consideración a lo anterior, considera la Sala que la demandante no tiene derecho al reconocimiento y pago del retroactivo pensional causado desde el **29 de junio de 2016** como se indicó en la sentencia de primera instancia, habida cuenta que la última incapacidad reconocida al demandante tuvo lugar el 8 de junio de 2018, según reposa en el historial de incapacidades emitido por la NUEVA EPS (fl. 21 del expediente digital 21).

Por lo expresado, al no ser compatible el pago de incapacidades médicas con el reconocimiento de la pensión de invalidez solicitada, se MODIFICARÁ la sentencia de primera instancia y se CONDENARÁ a PROTECCIÓN S.A. a reconocer y pagar al Sr. John Jairo Álvarez Ríos la suma de **\$46.003.348**, por concepto de retroactivo de pensión de invalidez causada partir del día siguiente del pago de la última incapacidad, ello es, a partir del **9 de junio de 2018** y hasta el 30 de junio de 2022, de conformidad con la siguiente tabla:

REAJUSTE PENSIONAL						
Año	IPC	Valor reconocido	Valor real	Diferencia mensual	# mesadas	Total retroactivo
2018	3,18%	\$ 0	\$ 781.242	\$ 781.242	7,7	\$ 6.015.563
2019	3,80%	\$ 0	\$ 828.116	\$ 828.116	13	\$ 10.765.508
2020	1,61%	\$ 0	\$ 877.803	\$ 877.803	13	\$ 11.411.439
2021	5,62%	\$ 0	\$ 908.526	\$ 908.526	13	\$ 11.810.838
2022		\$ 0	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	6	\$ 6.000.000
					TOTAL	\$ 46.003.348

Se advierte, que la liquidación se realiza a partir del 9 de junio de 2018, por haberse probado que la última incapacidad tuvo lugar el 8 de junio de 2018.

Por otro lado, si bien, en la historia laboral con fecha de generación del 22 de marzo de 2022 se determina que al mes de febrero de 2022 el empleador del demandante le cotiza al sistema de seguridad social en pensiones (expediente digital 23), el retroactivo pensional se reconocerá desde el pago del último subsidio de incapacidad, bajo el entendido que el empleador ha realizado el pago de aportes pensionales en virtud de la estabilidad laboral reforzada del demandante y por no haberse determinado la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral del actor, y como los IBC se realizan sobre el salario mínimo legal, entiende la sala que la intención no es mejorar el IBL de la pensión del actor sino el cubrimiento.

Costas en esta instancia, en la suma de \$500.000 a cargo de PROTECCIÓN S.A. y a favor del demandante, por haber prosperado parcialmente el recurso de apelación.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE la sentencia de primera instancia, para en su lugar **CONDENAR** a PROTECCIÓN S.A. a reconocer y pagar al Sr. John Jairo Álvarez Ríos la suma de **\$46.003.348**, por concepto de retroactivo de la pensión de invalidez causada partir del día siguiente del pago de la última incapacidad, ello es, a partir del **9 de junio de 2018** y hasta el 30 de junio de 2022, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás, la sentencia emitida por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín.

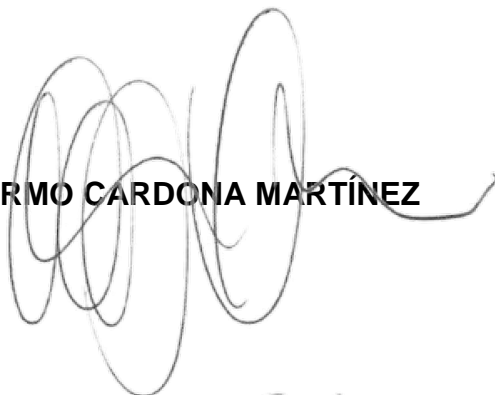
TERCERO: Costas en esta instancia, en la suma de \$500.000 a cargo de PROTECCIÓN S.A. y a favor del demandante, por haber prosperado parcialmente el recurso de apelación.

CUARTO: Las anteriores decisiones se notifican por EDICTO, conforme lo dispuesto en la providencia AL 2550, radicación 89628 del 23 de junio de 2021 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados.



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



SECRETARÍA SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

DEMANDANTE	: JOHN JAIRO ÁLVAREZ RÍOS
DEMANDADO :	: ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.
LITISCONSORCIO NECESARIO:	JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-014-2018-00493-01
RADICADO INTERNO	: 125-22
DECISIÓN	: MODIFICA PARCIALMENTE, CONDENA Y CONFIRMA

Magistrado Ponente
HUGO ALEXANDER BEDOYA DIAZ

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/126> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 06 de julio de 2022 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 06 de julio de 2022 a la 5:00pm



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO